RESOLUCION PARTICULAR

VISTO:

El Proceso Virtual N° 00, el Expediente N° 00 y otros del Sumario Administrativo instruido al contribuyente **NN** con **RUC 00**, en adelante **NN**, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Orden de Fiscalización N° 00 notificada el 28/03/2023, a través de la Dirección General de Grandes Contribuyentes (**DGGC**), la actual Gerencia General de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en adelante **GGII**, dispuso el control de las obligaciones del IRP de los ejercicios fiscales de 2018 y 2019, y del IRP RSP de los ejercicios fiscales 2020 y 2021 de **NN**, específicamente con respecto a las compras relacionadas con los proveedores **XX** con **RUC 00**; **XX** con **RUC 00** y **XX** con **RUC 00**; y para tal efecto le requirió que presente las facturas originales que respalden sus compras, así como también la forma de pago, además otros documentos relacionados a las operaciones comerciales; rubro y campo en el cual fueron declaradas en los Formularios 104 - IRP y 515 IRP RSP, sus libros contables e impositivos en formato digital, lo cual fue cumplido parcialmente por el contribuyente.

La Fiscalización tiene como antecedente al Informe DPO/DGGC N° 00/2023 del Departamento de Planeamiento Operativo (**DPO**) de la **DGGC**, mediante el cual se puso a conocimiento que en el marco de las investigaciones realizadas a proveedores involucrados en el esquema de utilización de comprobantes de presunto contenido falso denominado FACTURACIÓN 4.0, denuncia identificada ante el Ministerio Público como Causa N° 00/2023 "XX S/ PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS", se detectó que el contribuyente **NN** no declaró la totalidad de sus ingresos en concepto de Salarios del XX ya que el total de los descuentos fueron incluidos en concepto de descuentos legales; así mismo registro en el Libro Egresos Aranduka obrante en el Sistema de Gestión Tributaria Marangatu (**SGTM**) y en la Declaración Jurada Determinativa del IRP de los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y del IRP RSP de los ejercicios fiscales 2020 y 2021 supuestas compras de los siguientes proveedores que forman parte del esquema mencionado: **XX**; **XX** y **XX**, por lo que se generó la Denuncia Interna en la cual se recomendó la apertura de una Fiscalización Puntual a **NN**.

Durante la Fiscalización, los auditores de la **GGII** verificaron que **NN** utilizó y registró facturas correspondientes a los supuestos proveedores mencionados precedentemente, los cuales no reflejan la realidad de los hechos económicos, y con ello obtuvo un beneficio indebido al lograr reducir la base imponible del IRP y del IRP RSP en perjuicio al Fisco, mediante la maniobra de no declarar correctamente sus ingresos y declarar inversiones y gastos respaldados con facturas de contenido irregular, mecanismo por medio del cual pretendió hacer valer ante la Administración Tributaria (**AT**) formas manifiestamente inadecuadas a la realidad de los hechos gravados, todo ello en contraposición a los Art. 13 y 16 de la Ley N° 4673/12, los Arts. 63 y 64 de la Ley N° 6380/2019 y los Arts. 25 y 43 de la Ley N° 9371/2012.

Posterior a la notificación del Acta Final N° 00 del 01/06/2023 a través del expediente N° 00 del 16/06/2023 el **NN** manifestó: "...vengo a expresar mi allanamiento a la liquidación del Impuesto a la Renta Personal (IRP) y del Impuesto a la Renta Personal - Renta de Servicios Personales, en la suma de guaraníes cuarenta millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos treinta y cinco (Gs. 40.849.235) ...", "...no se reconoce y se impugna la calificación de la supuesta infracción como defraudación, como también se impugna y no se reconoce la sanción aplicada". Luego, por expediente N° 00 del 30/06/2026 el contribuyente solicitó: "...acogerse a los

beneficios del Decreto N° 7086/2022 modificado por el Decreto N° * 8634 /2022...". En ese sentido solicitó: Reducción de la multa por defraudación al 100%. Acogerse a los beneficios establecidos en el Decreto N° 7086/2022 modificado por el Decreto N° 8634/2022 y fraccionamiento por el plazo máximo previsto en los reglamentos.

A raíz de lo mencionado, la **DGGC** emitió la Resolución Particular DGGC N° 00 del 26/07/2023 en el cual fueron determinando los tributos reclamados a **NN**. Posterior a ello, el contribuyente interpuso el Recurso de Reconsideración N° 00 del 14/08/2023 contra la Resolución Particular mencionada debido a no estar de acuerdo con la calificación de la sanción establecida por la misma, y a través del Dictamen de Reconsideración N° 00 del 11/09/2023 se rechazó el recurso mencionado confirmado de esta manera la RP recurrida.

En consecuencia, **NN** a través del expediente N° 00 solicitó la apertura del Sumario Administrativo, por lo que la Coordinación Jurídica Operativa (**CJO**) remitió los antecedentes al Departamento de Sumarios y Recursos 2 a fin de proceder con los tramites correspondiente dejándose sin efecto la Resolución Particular DGGC N° 00.

Por lo expuesto, los auditores de la **GGII** concluyeron que se configuró la intención de defraudar al Fisco, al enmarcarse los hechos constatados en lo establecido en los Num. 3) y 5) del Art. 173 la Ley. Así también, detectaron la irregularidad en la declaración de sus ingresos, gastos e inversiones, conforme a lo establecido en el Numeral 12) del Art. 174 de la Ley, concordante con el Art. 172 de la misma normativa, por lo que realizaron el ajuste fiscal correspondiente.

Dadas estas circunstancias, los auditores de la **GGII** sugirieron calificar la conducta de **NN** conforme a lo dispuesto en el Art. 172 de la Ley. En consecuencia, la aplicación de una multa por Defraudación de uno (1) a tres (3) veces el monto de los tributos defraudados conforme al Art. 175 de la Ley, de acuerdo al siguiente detalle:

Impuesto	Ejercicios Fiscales	Monto Imponible	Impuesto a Ingresar	Multa
512- AJUSTE IRP	2018	296.264.947	29.626.495	LA MULTA POR DEFRAUDACIÓN SERÁ GRADUADA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 175, CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS ARTS. 212 Y 225 DE LA LEY.
512- AJUSTE IRP	2019	54.312.025	5.431.203	
803 - AJUSTE IRP RSP	2020	69.905.970	5.791.537	
Totales		420.482.942	40.849.235	

A fin de precautelar las garantías constitucionales de la Defensa y el Debido Proceso, por Resolución N° 00 notificada el 10/11/2023, el Departamento de Sumarios y Recursos 2, en adelante (**DSR2**) dispuso la instrucción del Sumario Administrativo al contribuyente, conforme lo disponen los Arts. 212 y 225 de la Ley y la RG N° 114/2017 modificada por la RG N° 52/2020, que prevén los procedimientos para la determinación tributaria y la aplicación de sanciones respectivamente.

NN presentó su Descargo el 24/11/2023, por lo que se procedió a la apertura del Periodo Probatorio N° 00 del 19/12/2023, la que también fue debidamente notificada. Por su Parte el sumariado solicitó la producción de pruebas testificales y de informe, las cuales fueron admitidas y producidas. De acuerdo a la Resolución de Prórroga del Plazo N° 12 del 05/03/2024 se prorrogó el plazo del Sumario Administrativo; posteriormente, habiendo transcurrido el plazo legal y no habiendo más pruebas a diligenciarse se procedió al Cierre del Periodo Probatorio mediante Resolución N° 00 de fecha 08/03/2024. Los alegatos no fueron presentados por parte de **NN**, por lo que posteriormente el **DSR2** llamó a Autos para Resolver.

Todos los antecedentes agregados en el Sumario fueron analizados por el **DSR2**, conforme se expone a continuación:

En el escrito de Descargo, **NN** manifestó cuanto sigue: "...Primeramente, vengo a expresar mi allanamiento al valor consistente en concepto de impuestos que corresponde al IRP año 2018 y 2019 por la suma de Gs. 35.057.698, como así mismo, expresar allanamiento en el valor del impuesto correspondiente al IRP-RSP año 2020 consistente en la suma de Gs. 5.791.537 el cual fuera determinado por la administración tributaria en el informe final de auditoria bajo el número 00 de fecha 10/07/2023.

El allanamiento expresado lo realizo demostrando buena predisposición ante el Fisco, dado que la incorrecta liquidación de los referidos impuestos fue atribuible al Contador Público XX, razón por la cual se niega responsabilidad tributaria atribuible a esta parte (el contribuyente) admitiendo el pago del impuesto determinado por la Administración.

Se aclara que la tramitación de los documentos contables, ya sea de gastos e ingresos, quedaban en poder del referido profesional contable, quien además poseía las claves y contraseñas para presentar las liquidaciones tributarias en el sistema Marangatu.

La aceptación mediante el allanamiento del valor del impuesto adeudado por los periodos fiscales referidos corresponde a un acto de honestidad hacia la administración tributaria solicitando que así se declare en el presente sumario..." (sic).

Así mismo, **NN** siguió manifestando: "...Se niega y se impugna la calificación de la supuesta infracción como defraudación, como también se niega y se impugna la sanción aplicada del 130% en concepto de multa sobre el impuesto, por la suma de Guaraníes Cincuenta y Tres Millones ciento cuatro mil seis (Gs. 53.104.006-), en razón de que no existió la intención de obtener un beneficio indebido para el contribuyente, no existió una omisión, no existió una simulación, no existió un ocultamiento o maniobra para que sea calificada la conducta del contribuyente como defraudación, tal como lo define el Art. 172 de la ley 125.

La Juez Instructora podrá acreditar que el en acta final se expresa que la culpa administrativa lo tuvo otra persona (un tercero), quien es el Contador Público de nombre XX. Es la propia Administración la que le atribuye la comisión del hecho punible de confeccionar y utilizar factura de contenido falso, el cual derivo en la causa penal Nro 00/2023 s/ Producción de Documentos no auténticos, denunciado por el Departamento de Investigación Tributaria (DIT) mediante el INFORME CITGR/IT N 00/2022 del 07/10/2022. Es decir, la propia administración admite dicha circunstancia, por lo que no puede atribuirse responsabilidad al Contribuyente y calificar el hecho como defraudación fiscal. Esa fue la razón por la cual, esta parte (el Contribuyente) admitió el valor del impuesto determinado, según los antecedentes que obran en la administración, pero impugno la calificación e Impugnó la multa determinada por la administración en el acta final..." (sic).

En referencia a la manifestación realizada por el sumariado, el **DSR2** mencionó que el allanamiento implica el reconocimiento del derecho material invocado en el acto administrativo y consecuentemente la renuncia a oponerse a la pretensión del Fisco, en concordancia con lo definido en el Diccionario de Ciencias Jurídicas de Manuel Ossorio (2001) "ALLANARSE: Admitir, conforme con peticiones o requerimientos de otros"; lo cual se observa en el escrito presentado por **NN** con relación a las obligaciones que le fueran reclamadas no así sobre la multa establecida por la **AT**.

El **DSR2** resaltó que el análisis del caso se centró en dos aspectos, en primer término, con lo relacionado a la incorrecta declaración de los ingresos y en segundo aspecto en la comprobación de las operaciones consignadas en los comprobantes supuestamente emitidos por los proveedores cuestionados, de manera a validar su uso como respaldo para la liquidación del IRP y el IRP RSP por parte de **NN**. En este marco, mediante la comparación de las documentaciones presentadas por el sumariado con los datos obtenidos de las DD.JJ informativas obrantes en el

ARANDUKA así como en los Libros de Ingresos y las liquidaciones de salarios se observaron diferencia en el ejercicio fiscal 2018 en el cual el sumariado utilizó la totalidad de los descuentos correspondiente a su aporte jubilatorio consignando la suma de G. 78.921.861 debiendo ser la suma G. 33.831.042. Lo mismo fue verificado en el ejercicio fiscal 2019, utilizando la totalidad de los descuentos como aporte jubilatorio la consignación de la suma de G 87.693.252 debiendo ser la suma G. 33.381.227. Con respecto al ejercicio fiscal 2020, fue observado que, para la casilla de Ingresos Gravados, **NN** consignó el ingreso bruto en el Formulario N° 515, debiendo declarar los ingresos netos y sin el aporte jubilatorio como egresos, conforme a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 6380/2019. Con relación a los gastos e inversiones las mismas fueron respaldadas con comprobantes que no reflejan los hechos económicos descriptos en ellas, ya que los bienes y servicios descriptos en las facturas cuestionadas son de imposible realización y por esta razón fueron impugnados.

El **DSR2** mencionó que durante las audiencias testificales solicitadas mediante los Formularios Nros. 00 del 23/01/2024 y 00 del 23/01/2024, y que fueron llevadas a cabo en fecha 26/02/2024 en la sede del juzgado sumarial, **XX** con CIC N° 00, **XX** con CIC N° 00, **XX** con CIC N° 00 confirmaron la relación laboral entre **NN** y el **XX**, pero ninguno de los 3 testigos reconoció a los supuestos proveedores del sumariado: **XX** con **RUC 00**, **XX** con **RUC 00** ni a **XX** con **RUC 00**, por lo que con el diligenciamiento de esta prueba no se pudo confirmar la realización de los servicios descriptos en las facturas mencionadas y que son objeto de este Sumario Administrativo, ya que las mismas fueron cuestionadas al ser utilizadas por **NN** para respaldar sus gastos e inversiones.

Asimismo, el **DSR2** señaló que la **GGII** basó su denuncia en las evidencias obtenidas durante los diferentes procedimientos realizados tales como el cruce de datos obrantes en el Sistema de Gestión Tributaria Marangatu (**SGTM**) así como también en las entrevistas informativas efectuadas a varios de los supuestos proveedores, lo cual sirvió de indicios para la exhaustiva verificación al sumariado a fin de comprobar los hechos mencionados.

En este sentido, la **GGII** a través de sus dependencias realizó controles de los documentos y/o informes que los contribuyentes están obligados a proporcionar, y al constatar alguna inconsistencia está obligada a informar el hecho a fin de realizar el seguimiento de la misma, hecho ocurrido en el caso analizado, motivo por el cual se mencionan como antecedentes de la Fiscalización a **NN**, la Nota CITGR/IT N° 00/2022 del Departamento de Investigación Tributaria mediante la cual informó ciertas inconsistencias detectadas con relación a los proveedores mencionados en los párrafos anteriores y sugirieron realizar otros controles más acabados, cuyo resultado fue expuesto en la Nota DPO DGGC N° 00/2023 del **DPO** y en ella se identifican a más proveedores en situación irregular; además, fue identificado el profesional contable **XX**, que de alguna u otra forma estaba vinculado a los supuestos proveedores. Entonces, en el Informe Final de Auditoría se invoca a los proveedores al sólo efecto de señalar que a partir de su declaración fueron realizados controles más exhaustivos.

El **DSR2** prosiguió señalando que durante el proceso de Control mencionado se tomó entrevistas a los proveedores inconsistentes, éstos fueron realizados en el marco de lo dispuesto en el in fine del numeral 3) del Art. 189 de la Ley, los cuales manifestaron que desconocían las facturas presentadas, además negaron haber realizado las operaciones económicas con los montos expuestos en las facturas y de las evidencias colectadas se concluyó que materialmente resulta imposible que hayan prestado los servicios o proveído los bienes mencionados en las facturas cuestionadas. Es aquí que la contribuyente **XX**, señaló que es psicóloga y docente universitaria, que el **XX** es su contador desde al año 2015 y el cual maneja su clave acceso al Marangatu y que el mencionado profesional tiene en su poder todos sus talonarios, la misma tampoco reconoció como clientes contenidos en el listado puesta a su vista, entre ellos el sumariado, además existe una denuncia ante el Ministerio Público realizada en contra del mismo por la contribuyente. En ese mismo sentido, se manifestó en entrevista informativa el contribuyente **XX**, quien además dijo que no tiene personal a su cargo razón por la cual no reconocía las supuestas ventas realizadas a **NN** y **XX** también mencionó al profesional técnico contable como su contador y era

este quien gestionaba con su clave de acceso en el **SGTM** todas las cuestiones relativas a su contabilidad además el mencionado proveedor dijo que dedicaba al servicio de instalación de sistemas de circuito cerrado y no reconocía las supuestas ventas realizadas a **NN**.

De esta forma, el **DSR2** recalcó que **NN** no aportó los elementos necesarios para desvirtuar la denuncia de los auditores ya que a pesar de haber presentado testigos para producir prueba testifical, la misma no aportó elementos probatorios que hacen a su derecho, sino simplemente se limitó a señalar como responsable al contador **XX** sin que haya producido prueba concreta sobre las operaciones cuestionadas o algún elemento sustancial durante el procedimiento sumarial, razón por la cual se concluyó que los actos de comercio entre el sumariado y sus proveedores no se materializaron con lo cual quedó rebatido el argumento sostenido por el mismo en este punto. También es importante la prueba de informe solicitada al Ministerio Público sobre los casos relacionados al contador mencionado, el cual no fue conducente dentro del proceso a fin de que el mismo, pueda rebatir la denuncia en su contra

Por todo esto, el **DSR2** concluyó que el contribuyente **NN** no puede trasladar su responsabilidad a terceros ya que todos los testigos ofrecidos por su parte mencionaron que existía una relación laboral entre los mismos, por lo que el sumariado no puede negar el vínculo establecido con el profesional contable mencionado en el párrafo anterior. En ese sentido, el artículo 180 de la Ley establece claramente que *"La responsabilidad por infracciones tributarias, independientemente de su tipificación y sanción en la legislación penal, **es personal** del autor, salvo las excepciones establecidas en esta ley"*.

En consideración a todo lo expuesto, el **DSR2** agregó que la normativa tributaria dispone que los montos de las operaciones consignadas en las DD.JJ. de los contribuyentes deben cumplir con los requisitos formales señalados en la Ley y las reglamentaciones en el sentido de que, además de estar debidamente documentados, indefectiblemente deben corresponder a una erogación **"real"** que implique un hecho económico que se haya indubitadamente efectuado; y que los comprobantes registrados por **NN** fueron impugnados porque los mismos no reflejan la realidad de las operaciones ya que corresponden a facturas cuyos contenidos describen operaciones y montos inexistentes, por lo que no dan derecho a su deducibilidad.

Asimismo, el **DSR2** agregó por otra parte, que los actos administrativos emitidos por la **AT** gozan de la presunción de legalidad y legitimidad; en consecuencia, por el Principio de Inversión de la Carga de la Prueba, el que pretenda impugnar ese acto debe probar sus alegaciones. En el caso particular, el **DSR2** resaltó que ninguno de los hechos antes mencionados fue desvirtuado por **NN**, pues no ha aportado elementos válidos como recibos, cheques, notas de remisión o cualquier otra documentación relacionada a los conceptos facturados por los supuestos proveedores que pueda certificar la realidad de las operaciones y que puedan refutar la denuncia en su contra, pues solo se limitó a querer trasladar su responsabilidad personal al contador **XX**.

Por otra parte, el **DSR2** aclaró que, si bien la **AT** autorizó la emisión de los comprobantes impugnados y otorgó el Timbrado, la responsabilidad de ésta se limita a la verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter formal establecidos en la reglamentación, siendo de exclusiva responsabilidad del vendedor y del comprador lo consignado en los comprobantes. Por lo cual, concluyó que el Timbrado del documento por sí solo no constituye aval alguno para demostrar que la operación efectivamente se realizó, y mencionó que incluso, dicha cuestión se encuentra expuesta al momento de consultar la validez de la documentación, que en su última parte suscribe: *"Esta consulta no verifica ni certifica la veracidad de la transacción de la operación"*.

Por los motivos señalados, el **DSR2** resaltó que las facturas fueron cuestionadas e impugnadas por el equipo auditor de la **GGII** debido a que las operaciones descritas en ellas son consideradas inexistentes, al verificarse que las mismas están registradas en los Libros Egresos del sumariado, comprobándose de esta manera que el mismo declaró la totalidad de las compras cuestionadas en sus DD.JJ. y en su libro ARANDUKA correspondientes a los ejercicios fiscalizados. En

consecuencia, el **DSR2** consideró correctas las impugnaciones realizadas con relación a los gastos declarados en el Formulario 104 – IRP y 515 IRP- RSP del IRP de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020, debido a que utilizó las facturas cuestionadas a los efectos fiscales, logrando así un beneficio indebido en perjuicio del Fisco.

Por todo lo expuesto, el **DSR2** resaltó que **NN** utilizó comprobantes de gastos que no reúnen las condiciones de deducibilidad establecidas en la reglamentación vigente y con ello infringió lo establecido en las disposiciones contenidas en los Art. 13 y 16 de la Ley N° 4673/12, los Arts. 63 y 64 de la Ley N° 6380/2019 y los Arts. 25 y 43 de la Ley N° 9371/2012, por lo que concluyó que corresponde el ajuste fiscal efectuado por los auditores de la **GGII**.

Por todo lo expuesto, el **DSR2** concluyó que se hallan reunidos todos los presupuestos para considerar la conducta del sumariado como Defraudación de conformidad al artículo 172 de la Ley, ya que comprobó la consignación en sus DD.JJ. y sus registros impositivos (ARANDUKA) como gastos, montos respaldados con comprobantes de operaciones que jamás existieron haciendo valer ante la **AT** formas manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados, beneficiándose en la misma medida en perjuicio del Fisco. La calificación de la conducta es el resultado de la valoración de la denuncia; en este caso al confirmar los auditores de la **GGII** la falta de cumplimiento del artículo 13, num. 3), inc. d) de la Ley N° 2421/2004, modificado por la Ley N° 4673/2012 y el Art. 86 de la Ley, evidenciaron que tal hecho constituye una infracción y en consecuencia corresponde calificar la conducta y aplicar la sanción.

Asimismo, debido a que **NN** incumplió lo establecido en los Arts. 22 y 68 del Decreto N° 1030/2013, los Arts. 25 y 43 de la Ley N° 9371/2012, y el Art. 5° de la RG N° 4/2018 y al valorar la situación, conforme al principio "XX", en virtud al cual el juez, en este caso la **GGII**, tiene suficiente libertad, para calificar la conducta del contribuyente, con base en los hechos denunciados por los auditores; por tanto, subsumió el hecho en lo establecido en el Art. 173 numeral 3) "*Declaraciones juradas que contengan datos falsos*", y en el artículo 174 numeral 12) "*Declarar, admitir o hacer valer ante la Administración formas manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados*", puesto que el contribuyente declaró montos referidos a operaciones que no existieron, y reiteramos, este hecho no fue desvirtuado por **NN**, por lo que NO CABE DUDA QUE SE CUMPLE lo establecido en el Art. 172 de la Ley, pues se presentan los siguientes elementos para su configuración:

1. **Que se trate de una conducta, acción u omisión:** en este caso acción, en razón de que el contribuyente utilizó y respaldó sus gastos con comprobantes que estaban relacionados a operaciones comerciales que no existieron;

Existencia de un ardid desplegado por el sujeto: **NN** declaró BAJO JURAMENTO, montos de gastos vinculados a operaciones inexistentes, en infracción a los artículos 13, num. 3, inc. d) de la Ley N° 2421/2004 y 86 de la Ley N° 125/1991;

La existencia de un perjuicio ocasionado al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito: el cual está representado por el monto del tributo incluido en los comprobantes cuestionados.

Por tanto, conforme a las evidencias obtenidas, el **DSR2** concluyó que se cumplieron todos los presupuestos para calificar la conducta del sumariado de acuerdo al tipo legal previsto en el Art. 172 de la Ley.

Para la graduación de la sanción, el **DSR2** señaló que, si bien existieron circunstancias agravantes, destacó que, para la aplicación de la sanción, es preciso considerar la finalidad de la misma, que además de la reparación del daño, debe ser lo suficientemente disuasiva para inducir al contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones, sin que ello signifique un sustancial menoscabo a su patrimonio, al punto de provocar el cierre o cese definitivo de las actividades comerciales del infractor. Por ello se constataron las circunstancias agravantes, conforme a los

numerales 1), 2), 5) y 6) del Art. 175 de la Ley **La reiteración**, configurada por la comisión de dos o más infracciones del mismo tipo dentro del término de 5 años. **El grado de cultura del infractor**; considerando que el contribuyente esta obligado al IRP lo que hace notar la posibilidad de asesorarse con profesionales idoneos en la materia. **La importancia del perjuicio fiscal** porque a fin de evitar el pago de los impuestos declaró gastos respaldados con documentos que no se ajustan a la realidad de los hechos.

Por esta razón y en cumplimiento del Principio de Proporcionalidad, que faculta a la **GGII** a determinar la cuantía de la sanción entre un mínimo y un máximo, y de acuerdo al análisis realizado en los párrafos anteriores del Art. 175 de la Ley; el **DSR2** consideró pertinente la aplicación de la multa del 250% sobre el tributo defraudado.

Finalmente, con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas anteriormente, el **DSR2** concluyó que corresponde dictar el acto administrativo y aplicar las multas.

POR TANTO, en uso de las facultades conferidas en la Ley.

EL GERENTE GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RESUELVE

Art. 1°: Determinar la obligación fiscal del contribuyente NN con RUC **00**, conforme a las razones expuestas en el Considerando de la presente Resolución de acuerdo al siguiente detalle:

Obligación	Periodo	Impuesto	Multa	Total
512 - RESOLUCIÓN DE AJUSTE IMPUESTO A LA RENTA DEL SERVICIO DE CARÁCTER PERSONAL	2018	29.626.495	74.066.237	103.692.732
512 - RESOLUCIÓN DE AJUSTE IMPUESTO A LA RENTA DEL SERVICIO DE CARÁCTER PERSONAL	2019	5.431.203	13.578.007	19.009.210
803 - RESOLUCIÓN DE AJUSTE IRP-RSP	2020	5.791.537	14.478.842	20.270.379
Totales		40.849.235	102.123.086	142.972.321

**Sobre los tributos deberán calcularse los accesorios legales conforme al Art. 171 de la Ley N° 125/1991.*

Art. 2°: **CALIFICAR** la conducta del contribuyente **NN** con **RUC 00**, conforme a lo establecido en el Art. 172 de la Ley N° 125/1991; y **SANCIONAR** al mismo con la aplicación de una multa equivalente al 250% sobre los tributos defraudados, conforme a las razones expuestas en el Considerando de la presente Resolución.

Art. 3°: **NOTIFICAR** al contribuyente conforme a la RG N° 114/2017 con su modificación dada por la RG N° 52/2020, a fin de que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución, bajo apercibimiento de Ley.

Art. 4°: **INFORMAR** lo resuelto a la Dirección General de Recaudación y de Asistencia al Contribuyente, a fin de que tome conocimiento de los términos de la presente Resolución, y cumplido archivar.

EVER OTAZÚ

GERENTE GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS